

artículo 59 de la Constitución federal, garantiza en términos absolutos el derecho del hombre, á no ser obligado á un trabajo personal sin su consentimiento pleno y sin una justa retribucion; que no hay razones ni fundamento alguno legítimo para considerar exceptuados de la regla constitucional los cargos conseqüiles ó municipales; que en el caso presente, esta razon recibe aun nuevo vigor, por el hecho de no tener los quejosos de ninguna suerte, el carácter de municipales que habian perdido desde el instante que concluyó el periodo legal; que es por lo tanto evidente la violacion de la garantía consignada en el artículo 59.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución federal, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del Juez de Distrito de Nuevo Leon, que en nombre de la Justicia Nacional ampara y protege á los CC. Secundino Roel, Manuel Sada y Antonio Zambrano.

Devuélvase los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Asi por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Marzo 28 de 1874.—*Lic. Emilio Ordaz*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas por el C. Lic. Luis G. Ferniza, en representacion del C. español Antonio Llaguno, contra la orden de multa y prision librada por la Jefatura política de Sombrerete.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal alegando para definitiva en el juicio de amparo promovido por el C. Lic. Luis G. Ferniza apoderado del C. Antonio Llaguno, contra el procedimiento del Presidente municipal de Sain el Alto, que cumpliendo con una orden del Gefe político de Sombrerete, lo conminó con una multa de cien pesos que debía enterar en la receptoría de rentas de aquella Villa, en el término perentorio de veinticuatro horas, y que por su falta fuera remitido á aquella autoridad por medio de la fuerza de seguridad pública; mas como no se ha expresado el motivo porque se fulminaba aquella pena á dicho C. Llaguno, la autoridad responsable ha violado en su persona las garantías que otorgan los artículos 16 y 18 de la Constitución federal de la República, y por que el acto no fué determinado por autoridad competente que lo fundara y motivara; considerando por otra parte: que las autoridades políticas, no tienen jurisdiccion para fulminar contra nadie orden de prision ó multa pecuniaria y cualesquiera otra, pues segun el artículo del Código fundamental citado, solo hay lugar á prision ó multa por delito que merezca pena corporal; y como del acto que se reclama, aparece del documento número 1 de los presentados por el apoderado del C. Llaguno, que por haberse negado el comisario de la Hacienda del Saus á salir con una escolta de la finca para aprehender á un ladrón que robaba en el punto llamado "Vinata del Rincon del Aguila", solo dicho comisario es responsable y no el

C. Llaguno; por tanto y reproduciendo su pedimento del día 4 del corriente, y de conformidad con lo dispuesto en la ley de 20 de Enero de 1869, el Promotor fiscal concluye pidiendo al Juzgado se sirva declarar: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Antonio Llaguno contra el acto de la presidencia municipal de Sain-Alto que en cumplimiento de una Orden de la Gefatura política de Sombrerete, le impuso la multa de cien pesos á dicho Sr. por el motivo expresado de haberse negado el comisario del Sauz á salir con la escolta pedida por aquella autoridad.

Zacatecas, Febrero 16 de 1874.—*Jesus M. Licona.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Zacatecas, 18 de Febrero de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por el C. Lic. Luis G. Ferniza, en representacion del súbdito español D. Antonio Llaguno, contra la Orden de la Gefatura política de Sombrerete, fecha 24 de Noviembre último, ejecutada por el Presidente Municipal de Sain el Alto, en la que se impone al referido Llaguno una multa de cien pesos, mandándose por la autoridad que si no se pagaba la multa dentro de veinticuatro horas, se aprehendiera á Llaguno y se remitiéra á Sombrerete, usando, si se necesitare, de la fuerza de seguridad pública, sin expresar en la Orden, ni el motivo, ni el fundamento del procedimiento contra Llaguno, por lo que se consideran violadas las garantías que protegen los artículos 16 y 18 de la Constitucion general. Vistos los informes de la autoridad ejecutora, en los que se refiere exclusivamente á las Órdenes libradas al comisario de la Hacienda del Sauz, propiedad de D. Antonio Llaguno, para la aprehension de Hilario Sosa en el punto del Rincon del Aguila, perteneciente al Partido de Fresnillo, sin que se deduzca de los documentos que en copia remite, el origen

TOMO V.—PARTE II.

del procedimiento de la Gefatura política de Sombrerete, contra D. Antonio Llaguno. Vistos los pedimentos del C. Promotor fiscal y su alegato; concluyendo en todos, que debe concederse el amparo que se solicita, por estar demostrada la violacion de los artículos 16 y 18 de la Constitucion general. Vistos el alegato del C. Lic. Luis G. Ferniza; el recibo de la multa pagada en la Receptoría de Sain el Alto y la citacion para sentencia; resultando plenamente probada la violacion de los artículos 16 y 18 de la Constitucion general, por carecer la Orden de la Gefatura política de Sombrerete, de los términos legales, y por haberse hecho efectiva la multa por el amago de la prision que contiene la Orden citada. Considerando: que los fundamentos legales en que se apoya el quejoso y el C. Promotor fiscal, demuestran la violacion de la seguridad de la persona y de la propiedad que protege el Código fundamental, sin poder ampliar el juzgado las razones expuestas, por no hacer una calificación del procedimiento de las autoridades que han intervenido, cosa prohibida por la ley; que aun á la aplicacion de las doctrinas de los apuntes para el estudio del derecho constitucional mexicano del Sr. Castillo Velasco, podría dársele esta interpretacion.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la Constitucion general y en la ley de 20 de Enero de 1869, sentenciando definitivamente este juicio, el Juzgado declara: 1º Que la Justicia de la Union ampara y protege á D. Antonio Llaguno, contra la Orden del C. Gefe político de Sombrerete, ejecutada por el Presidente municipal de Sain Alto, por la que sin motivar el procedimiento se le impuso una multa de cien pesos, amagando á Llaguno con la aprehension y remision á Sombrerete, con el auxilio de la fuerza de seguridad pública, en el caso de no pagar la referida multa, por haberse violado con estos procedimientos las garantías que protegen los artículos 16 y 18 de la Constitucion general.

2º: Tómese razon del poder presentado y devuélvase; repóngase el papel del sello quinto de que se ha hecho uso, con el del sello correspondiente, y remítase este juicio en revision á la Suprema Corte de Justicia, sacándose las copias respectivas para el Semanario Judicial y para el Periódico oficial del Estado, en cumplimiento de la ley. Hágase saber.

El C. Juez de Distrito del Estado, lo decretó y firmó. Doy fé. Firmado.—*Manuel G. Solana.*—*Luis G. Chavez.*

Es copia que certifico. Zacatecas, Febrero 19 de 1874.—*Luis G. Chavez.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo 7 de 1874. Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas por el C. Lic Luis G. Ferniza en representacion del C. español Antonio Llaguno, fundándose en la infraccion de los artículos 16 y 18 de la Constitucion federal; el informe de la autoridad responsable; lo alegado por el quejoso; el parecer fiscal; el fallo del inferior; y

Considerando: que aunque el Reglamento de la ley contra salteadores y plagiarios expedido en Mayo de 1871 está en todo su vigor, las autoridades á quienes se cometió su aplicacion, deben cuidar escrupulosamente de no vulnerar ninguna de las garantías consignadas en la Carta fundamental; que en la orden de multa y de prision en caso de no pagar, librada por la Gefatura política de Sombrerete, y ejecutada por el Presidente municipal de Sain-Alto, no aparece fundamento alguno de la causa legal del procedimiento; y que es en consecuencia flagrante la violacion de una de las garantías consignadas en el artículo 16 de la Constitucion federal.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la misma Constitucion, se declara:

que es de confirmarse y se confirma la sentencia del Juez de Distrito de Zacatecas, que ampara al C. español Antonio Llaguno, contra la orden de multa y prision librada por la Gefatura política de Sombrerete.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nágera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Abril 18 de 1874.—*Lic. B. Ordaz*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Morelos, por el C. José Coria, contra el Gefe político y Juez de primera instancia del Distrito de Cuautla Morelos, por violacion de garantías constitucionales.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que con fecha 24 de Diciembre próximo pasado, D. José Coria presentó escrito á este Juzgado, quejándose de que por haber seguido una práctica constante nombrando como alcalde 2º del Ayuntamiento de Morelos, nuevo cuidador de la capilla de Guadalupe, habia sido mandado suspender en aquel cargo por orden del C. Gefe político y reducido á prision por el C. Juez de 1ª instancia; y designando como violadas por ese procedimiento, las garantías individuales que otor-